



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 16384 / 2025 - AML

Autos: “FONTANA, ABEL MARIO c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte Nro. 16384/2025

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Surge de autos que mediante la Resolución N ° 2025-12-E-AFIP -DVRRLP#SDGOPII, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, resolvió no hacer lugar a la presentación interpuesta por Fontana Abel Mario, en concepto de “falta de denuncia de trabajadores y/o cumplimiento sobre retención de aportes en la declaración jurada determinativa”.

II.- Contra ello, el actor, interpuso recurso de apelación, dentro del plazo prescripto por la legislación aplicable en la materia.

Asimismo se le notificó lo resuelto y se le comunicó que la resolución era susceptible de ser recurrida ante esta Alzada, debiendo depositar dentro de los plazos correspondientes el importe resultante de la resolución administrativa (art 15 de la ley 18.820 y art. 39 bis del decreto ley 1285/58 modificada por ley 24.463. Interpone la parte actora recurso de apelación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, informa que la contribuyente cumplió con el pago del depósito previo, a los fines de la apertura de la instancia judicial, elevándose las actuaciones a esta Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social, para su intervención, motivo por el cual corresponde la apertura del recurso.

III.- La parte actora se agravia de lo decidido, en tanto considera la improcedencia del ajuste realizado. Agrega que los trabajadores son un grupo de empleados que prestaron “servicios discontinuos” y temporarios en los términos de la ley 26.727 y que todos se presentaron a trabajar el día 20 de diciembre de 2023, con tareas relativas a la recolección de papa. Efectúa diversas consideraciones relativas a que no se tuvieron en cuenta las fechas de alta y baja (acompaña documentos), lo que considera que nada justifica a que el organismo fiscal retrotraiga el ajuste a días anteriores al alta y posteriores a la baja. Asimismo considera que no se ha constatado debidamente el domicilio en donde los trabajadores realizan tareas. En definitiva, argumenta que la Administración no produjo prueba alguna para sustentar el ajuste, apoyándose en meras manifestaciones.

IV.- Conforme se desprende de autos, la causa tiene su origen en el relevamiento efectuado por el inspector interviniente en la fiscalización, el que realizó un relevamiento de personal en el domicilio del contribuyente quien se encuentra inscripto en la actividad de venta de frutas y verduras y, a su vez, cultivo de papa, batata,



mandioca y de maíz. Así es que se detectaron supuestas irregularidades relativas a diferencias en la remuneración declarado por el empleador respecto de los empleados relevados.

Entrando a la cuestión a resolver, corresponde señalar en primer término que si bien este tribunal comparte el valor probatorio de las manifestaciones espontáneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades administrativas, en el caso de autos los datos declarados no tienen aptitud para formar convicción respecto de la cuestión, pues en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la justa resolución de la cuestión. Pues, aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás “Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549”, pág 29 y ss).

Ello así, el organismo fiscal no ha merituado debidamente lo expresado por la parte actora ni la documentación aportada. De esta manera, la garantía del debido proceso legal lleva aparejado diversos elementos integratorios para el administrado; el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a que se dicte una decisión fundada que contemple sus alegaciones y resuelva sus pretensiones.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que si en el proceso administrativo se procura la preparación y el dictado de actos administrativos con los cuales se satisface en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y los fines del Estado y en definitiva de la comunidad toda, no es menos cierto que estos actos están dirigidos por la exigencia de su legitimidad, o sea de su subordinación completa al orden jurídico del cual resulta todo lo atinente a la oportunidad, mérito y conveniencia (en este sentido, Escola Héctor J: Tratado General de Procedimiento Administrativo, Ed. 1975).

En los procedimientos de impugnación es el administrado quien pretende la actuación de la ley, en sentido lato, entendiendo que su pretensión procede más que la articulada por la Administración, sin perjuicio de que ésta ratifique su accionar.

García Oviedo señala que “las exigencias propias de un estado de derecho imponen a la administración un régimen jurídico que ordene su vida y al propio tiempo, garantice a los particulares sus situaciones jurídicas frente al obrar de aquella” (García Oviedo, Derecho Administrativo, Madrid, 1959, T. 1, PÁG. 619).

Por ello, en el procedimiento administrativo impera el principio de verdad material o real. La administración debe llevar a cabo las medidas de prueba que sean conducentes para determinar la realidad efectiva de los hechos. De esta manera, compete al organismo administrativo apreciar las probanzas producidas, no ya sobre la base de los principios rígidos sino de manera lógica y natural, aquilatando cada una de ellas en su tramitación previa resolución que se recurre.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

En este aspecto, en los presentes actuados la cuestión se centra en los elementos probatorios ofrecidos por el responsable, y dictar una resolución lo más acorde posible con la realidad de los hechos.

Así, a fin de garantizar con plenitud el derecho del recurrente a ser oído y defenderse, sin que ello implique emitir opinión respecto al fondo de la cuestión, corresponde dejar sin efecto la resolución recurrida disponiendo el dictado de una nueva, previo análisis de la documentación aportada por la recurrente.

En igual sentido, se ha expedido esta Sala en autos “Johnson Acero S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Impugnación de Deuda”, sentencia 90594, del 7 de febrero de 2001.

Por lo expuesto, no resultando de las constancias de autos que se hayan arbitrado medidas suficientes para indagar la verdad objetiva de los hechos, ni aplicado criterios de razonabilidad, a fin de que el pronunciamiento produzca efectos jurídicos válidos (cfr. art. 1 incls. a, b c y f de la ley 19.549 y esta Sala en autos “Industrias Metalúrgicas Dino Bartoli c/ Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- s/ Impugnación de Deuda”, sentencia definitiva N° 119.396 del 29/06/06, entre otros), corresponde declarar formalmente admisible el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida ordenando al organismo que dicte una nueva resolución teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos y que reintegre la suma depositada por la apelante para acceder a la instancia judicial con más sus intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco central de la República Argentina, desde la fecha en que se hizo efectivo el depósito y hasta su devolución al depositante (conf. Art. 10 dto. 941/91; CSJN L. 44.XXIV “López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A”, sentencia del 10/06/92 y Fallos 303:1769, 311/1644, entre otros).

V- En atención a que la AFIP no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 párrafo segundo del CPCCN).

La Dra. Viviana Piñeiro no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1)- Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; 2)- Dejar sin efecto la resolución recurrida de acuerdo a las consideraciones expuestas precedentemente, ordenándose el dictado de una nueva ; 3)- Ordenar al organismo a que reintegre la suma depositada por el apelante para acceder a la instancia judicial, con más sus intereses a la tasa promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha en que se hizo efectivo el depósito y hasta su devolución al depositante (conf. Art. 10, dto. 941/91; C.S.J.N. L. 44. XXIV “López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A., sentencia del 10/06/92 y Fallos 303:1769; 311:1644, entre otros); 4) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública –dependiente de la CSJN (conf. Ac. 10/25) y, oportunamente, remítase.





#39987726#461235214#20250624140456415